

H.R ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS

Bogotá D.C mayo de 2021

Honorable Representante
GERMAN BLANCO
Presidente
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Bogotá D.C

Cordial saludo, Señor Presidente:

De manera atenta, presento proposición modificativa en relación al Proyecto de Ley Estatutaria N° 295 de 2020 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 430 de 2020 Cámara y con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 468 de 2020 cámara “Por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”.

Modificar el artículo 8 adicionando el numeral 1.1, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. Modifíquense los numerales primero y tercero del artículo 13 de la ley 270 de 1996, los cuales quedarán así:

ARTÍCULO 13. DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR OTRAS AUTORIDADES Y POR PARTICULARES. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

1.1. Mediante auto motivado, la mayoría absoluta del pleno de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes podrá suspender provisionalmente del ejercicio de sus funciones a los servidores sobre los cuales ejerce la función jurisdiccional. Su discusión y aprobación ocupará el primer punto del orden del día.

H.R ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS

Adicionar un párrafo nuevo transitorio, el cual quedará así:

PARÁGRAFO NUEVO TRANSITORIO: En un término de un año, el Congreso de la República reglamentar la facultad de suspensión provisional otorgada a la Comisión de Investigación y Acusación en los términos señalados por la presente ley.

JUSTIFICACIÓN: Se hace necesario equiparar en armas a todas las autoridades que ejercen función jurisdiccional, La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y demás jueces de la república tienen bajo su potestad aplicar por orden judicial medidas provisionales y cautelares que limitan la libertad o suspenden de sus funciones a los investigados, así mismo, en otrora, en materia administrativa el consejo de Estado y las autoridades administrativas disponían del artículo 58 numeral 4 de la ley 80 para suspender a los servidores mientras se adelantaban investigaciones en su contra. Igual poder conserva en la actualidad la Procuraduría General de la Nación, quien según lo dispuesto del artículo Ley 734 de 2002 en el artículo 44 y ahora el 217 de la Ley 1952 de 2019 esta puede ejercer la suspensión provisional, al igual que la Contraloría General de la República, la cual según el artículo 268 numeral 8 de la Constitución, faculta al Contralor General de la República para solicitar la suspensión inmediata de los funcionarios involucrados en los procesos que tiene a su cargo. Así mismo, las Superintendencias pueden suspender a sus vigilados, caso concreto de las Superintendencia de notariado y registro de acuerdo a resolución debidamente motivada.

La propuesta busca facultar a la Comisión de Investigación y Acusación de suspender a los servidores que esta investiga, suspensión provisional del cargo entendida como *“una medida cautelar de origen constitucional que no busca sancionar sino asegurar la transparencia, imparcialidad y efectividad de la investigación”*. sentencia C-484 de 2000

Basta con analizar la efectividad de la Comisión legal de Investigación y Acusación de la cámara de representantes desde el año 1992 hasta la fecha. Desde 1886, se volvió una tradición donde las personas que llegaban a ejercer esos cargos sólo podían ser investigados por el Congreso de la República y no por los altos tribunales. Y que, con el paso de los años, terminó convertido en una especie de inmunidad a la hora de responder cualquier inquietud de la justicia.

H.R ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS

Si analizamos las cifras desde 1886 sólo un presidente ha resultado condenado por el congreso, el general Gustavo Rojas Pinilla (presidente de Colombia entre 1953 y 1957). En 1959, el general fue declarado indigno por abuso de autoridad y concusión. Absuelto con posterioridad.

De acuerdo con la Corporación Excelencia a la Justicia, que hizo balance del trabajo de la Comisión de Acusaciones, señala que desde 1992 hasta el 2013 se recibió un total de 3.496 denuncias. El 56 % de ellas, 1.957, fueron archivadas; el 44 %, 1.538 casos, aún falta por resolver. Y ni un solo fallo de fondo se registró.

De todas las denuncias recibidas, el 42 % son contra magistrados de las altas Cortes, el 30 % contra presidentes y el 28 % corresponde a denuncias contra los fiscales generales. De los 1.473 contra magistrados de las altas Cortes, 635 fueron archivadas; de los 964 contra los fiscales, 726 no prosperaron, y de los 1.059 contra presidentes, 605 culminaron en archivo. En la actualidad pese a mejorar estos indicadores por todo el esfuerzo realizado en los últimos años, los números no dejan de ser negativos para la Comisión.

Los juicios contra aforados históricamente no han funcionado porque la Comisión carece de herramientas jurídicas que logren la transparencia de la investigación. En muchos casos es imposible adelantar una investigación con el funcionario manejando los hilos de la entidad, suministrando la documentación y material probatorio que exigen los representantes.

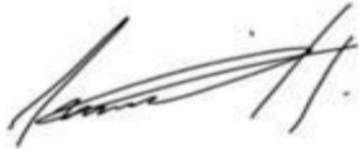
Lo que aquí se plantea es la separación temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad jurisdiccional, la cual deberá ser decretada mediante acto motivado por el pleno de la Comisión de Investigación y Acusación, la cual generará la vacancia temporal del empleo.

El empleado suspendido en el ejercicio de su cargo por orden de esta autoridad jurisdiccional conservará su calidad de empleado público hasta tanto se defina su situación jurídica definitivamente; lo cual significa que, si es condenado por el delito que se le acusa, debe ser destituido inmediatamente; si, por el contrario, no se le comprueban los cargos que se le endilgan, deberá ser absuelto. En ambos casos, la situación laboral del empleado se retrotrae a la fecha en que fue suspendido.

El término de esta suspensión provisional, los mecanismos para su solicitud, la aplicabilidad y su preponderancia a la hora de discutirla serán motivos de la Ley que para ese menester elaboremos como congreso. Disponiendo además que una vez

H.R ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS

desaparezcan los motivos que dieron lugar a la suspensión provisional la misma, deberá ser revocada en cualquier momento por quien la misma Comisión de Investigación y Acusación.



ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS
Representante a la Cámara
Partido Liberal Colombiano